

.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Rivera Lucero, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y deduce reclamo en contra del Consejo para la Transparencia, por la ilegalidad en que habría incurrido con motivo de la Decisión de Amparo Rol N° 8223-2019, adoptada en la Sesión N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, mediante la cual se acogió el amparo de acceso a la información formulado por José Joaquín Suzuki Vidal, ordenándole hacer entrega de “la información consistente en el listado de las querellas interpuestas por el servicio entre el 18 y 28 de octubre de 2019, precisando el Tribunal donde se interpuso y el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC)”.

Alega el reclamante que mediante Solicitud de Acceso a la Información Pública de 18 de noviembre de 2019, José Joaquín Suzuki Vidal pidió al INDH el listado de las 345 las querellas interpuestas por el Instituto entre el 18 y el 28 de octubre de 2019, con indicación de su fecha, Tribunal y Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC). Añade que por Resolución Exenta N° 371, de 3 de diciembre de 2019, el INDH contestó la solicitud denegando la entrega de los RIT y RUC de las querellas presentadas, informando que los antecedentes relativos a las acciones judiciales presentadas se encontraban publicados en el enlace que se proporcionaba.

Indica luego que el 24 de enero de 2020 el requirente presentó un amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia alegando que se le había proporcionado una respuesta incompleta o parcial y en sus descargos el INDH argumentó sobre el deber de reserva que le asiste respecto de la identidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos y cualquier dato que permita determinarlas, como los RUC o RIT de las querellas correspondientes, lo que configura una causal legal de reserva. Sin embargo, continúa, el Consejo para la Transparencia, a través de la decisión de 14 de abril de 2020, acogió el amparo deducido y ordenó la entrega de la información consistente en el



listado de las querellas interpuestas por el servicio entre el 18 y 28 de octubre de 2019, precisando el Tribunal donde se interpuso y el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC).

Se argumenta a continuación que el INDH denegó la información invocando los N^{os} 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, que permite la reserva cuando la publicidad afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Refiere luego que la Constitución Política consagra en el inciso 2° del artículo 8° el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, pero que el propio constituyente previó como excepción a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, en la misma norma, el evento que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, cuestión que en el caso concreto se cumple, ya que el INDH estima que la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 se funda en las normas establecidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como por la Ley Sobre Protección de la Vida Privada.

Sostiene que la regla constitucional en cuanto a que el establecimiento de la reserva o secreto esté contenida en una ley de quórum calificado fue incorporada por el artículo 1° N° 3 de la Ley N° 20.050, de 26 de agosto de 2005, por lo que se entiende que la referida Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Chile y promulgada por Decreto Supremo N° 808, de 7 de octubre de 1988, publicada el 26 de noviembre de 1988, cumple con el requisito de ser una ley de quórum calificado, en aplicación de la cuarta disposición transitoria de la Constitución, y lo mismo vale en el caso de la Ley N° 19.628, de 28 de agosto de 1999.

Cita los artículos 13 y 16 de la Convención contra la Tortura señalando que se consagra en ellos un concepto amplio de tortura, que incluye distintas hipótesis que las legislaciones nacionales pueden regular a través de



diversos tipos penales, extendiéndose la especial protección de las víctimas a todas ellas, y afirma que el INDH ha interpuesto querellas criminales por hechos calificados como torturas y respecto de las cuales el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha previsto un deber reforzado de protección para la víctima, atendida la naturaleza misma del hecho sufrido, adoptando medidas que no atenten contra su dignidad y protección, su derecho a la intimidad y la de su familia, dentro de las cuales se encuentra la no sobreexposición de sus relatos y datos personales o la difusión de los mismos.

Señala que si el INDH entregase la información solicitada, ciertamente se podría producir esta afectación a los derechos de las personas amparadas por la institución, perturbando su seguridad y/o vida privada, destacando que los hechos que constituyen actos de tortura pasan a formar parte de la privacidad de la víctima y se encuentran protegidos por su derecho a la intimidad, pues involucran afectaciones a su salud psíquica y física. Añade el reclamante que la entrega de la información solicitada permitiría conocer la identidad de las víctimas y detalles sobre los delitos sufridos, revelando datos personales y sensibles de los interesados, en los términos del artículo 2°, letras f) y g), de la Ley N° 19.628. Precisa que conforme al artículo 10 de esta ley la entrega de los datos solicitados permitiría identificar a determinadas personas y, por consiguiente, dar a conocer datos de carácter personal y/o sensibles, razón por la cual no habiendo autorización expresa de la víctima ni tampoco ley que lo autorice, el INDH no puede realizar el tratamiento de dicha información a través su comunicación o transmisión, por existir una prohibición específica en el aludido artículo 10.

Segundo: Que al evacuar el informe requerido el Consejo para la Transparencia, solicita el rechazo de la reclamación.

Expone que ha sido el legislador quien permite el conocimiento público del número de RIT, RUC o roles de las causas judiciales que se tramitan ante los tribunales de justicia y de la identidad de sus intervinientes, conforme el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal y la Ley N° 20.886. Explica a continuación que para ponderar las causales de reserva debe tenerse presente el marco normativo aplicable a la publicidad de los procedimientos judiciales en materia penal, dentro del cual se incluyen



los medios para identificarlos, como ocurre con el rol de cada causa y el tribunal respectivo en que se tramitan las correspondientes querellas.

Hace presente que las informaciones requeridas no constituyen datos sensibles al tenor de la letra g) del artículo 2° de la Ley N° 19. 628, toda vez que no revela datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual, sino que se trata de información objetiva relacionada con la identificación de determinadas causas judiciales iniciadas por querellas interpuestas por el INDH. Asimismo, estima que los datos solicitados no resultan reservados por el artículo 10 de la misma ley, que establece una prohibición de tratamiento de datos de carácter sensible.

Concluye sobre el punto que los datos consistentes en el RIT y RUC de las querellas interpuestas por el INDH entre el 18 y 28 de octubre de 2019 y el tribunal en que se tramitan son datos de carácter público, por encontrarse incorporados en el sistema de búsqueda de causas del Poder Judicial, el cual debe garantizar el pleno acceso de todas las personas en condiciones de igualdad y por existir norma expresa que obliga a publicar las sentencias penales.

A continuación indica que pese a que la información requerida podría permitir identificar a una persona determinada, no se trata de una difusión masiva de datos personales, sino de la entrega de la información a una sola persona que ejerció su derecho de acceso a la información pública en conformidad a la Ley N° 20.285, para acceder a los datos de las 108 querellas interpuestas en un acotado período de tiempo de abarca apenas 10 días del mes de octubre del año 2019, por lo que no es posible aplicar la obligación de guardar secreto sobre los mismos.

Alega también que la entrega de la información requerida no afecta el derecho a la vida privada y la seguridad de las personas, por lo que no se configura la causal de reserva prevista en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, ya que no revela los hechos que se relatan en las querellas que pudieren constituir actos de tortura, ni tampoco vejaciones, tratos inhumanos o degradantes ni los apremios ilegítimos que pudieren haber sido



denunciados por el INDH, ni tampoco otro tipo de información sensible de las víctimas que formularon denuncias ante el INDH, lo que permite sostener que sus alegaciones constituyen afirmaciones desprovistas de suficiencia para demostrar que vaya a producirse afectación a los derechos mencionados.

Agrega que contrariamente a lo sostenido por el INDH, las obligaciones que pesan a su respecto, relativas a la reserva de la identidad de los denunciantes cuando el caso lo amerite, no son distintas a las que recaen en los tribunales o el Ministerio Público, ni siquiera en atención a su objeto legal. Luego, concluye, si no lo requirió, se colige que el Instituto ponderó dicha situación y no lo consideró necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular.

En cuanto a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, precisa que la misma no establece la reserva o secreto de la información ordenada entregar en la decisión C8223-19, por lo que no tiene lugar la causal de reserva prevista en el N° 5 del artículo 21. Afirma que la citada alegación del INDH no puede ser acogida, en atención a que no formó parte de la oposición ni de sus descargos evacuados en el amparo en la forma en que ahora ha sido invocada en sede judicial, puesto que si bien en el procedimiento de amparo hizo alusión a la Convención, jamás sostuvo que se tratara de una ley de quórum calificado que establezca expresamente la reserva de lo solicitado. Resalta, en todo caso, que el artículo 13 citado no constituye una ley de quorum calificado que establezca la reserva de la información requerida, por cuanto lo que regula dicha norma es que toda persona sometida a tortura tiene derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, agregando que se deben tomar las medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado, es decir, consagra una obligación de resguardo del denunciante o de la víctima y de los testigos, pero no señala con especificidad que el nombre del querellante, el número de RIT o RUC de una querrela criminal o el tribunal en que el sustancie sea un dato reservado o secreto por ley.

Tercero: Que de lo reseñado en los motivos que anteceden y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá respecto de la causal de secreto o



reserva del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 invocada recién con motivo de la interposición del reclamo, aparece con claridad que el reclamante Instituto Nacional de Derechos Humanos estima que el Consejo para la Transparencia ha incurrido en ilegalidad al haberle ordenado entregar determinada información, pues en su concepto se encuentra comprendida en el N° 2 del citado artículo 21. De acuerdo a este precepto, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Pues bien, la información que el Consejo ordenó entregar al Instituto reclamante se refiere, en lo que interesa, a los RUC y RIT de las acciones judiciales interpuestas por el INDH en el periodo comprendido entre el 18 y 28 de octubre de 2019, respecto de hechos que no han sido calificados como homicidio, de manera tal que la esencia del problema radica en determinar si esta información es una de aquéllas cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Cuarto: Que una atenta lectura del texto de la norma del N° 2 del artículo 21 citado permite razonablemente sostener que para que resulte legalmente admisible afirmar la condición de reservada de la información, debe *afectarse* los derechos de las personas y el empleo de la forma verbal destacada conlleva la necesidad de determinar la efectiva perturbación de aquello que se pretende resguardar para configurar una auténtica excepción a la regla general de publicidad.

En razón de lo anterior, como lo ha afirmado tanto este Tribunal como la Corte Suprema en diversas oportunidades en que ha conocido de asuntos semejantes al presente, tocaba al ahora reclamante demostrar en qué medida la divulgación de la información requerida efectivamente afecta “los derechos de las personas, particularmente su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico” y ello en el caso de la especie no ha acontecido, pues, en efecto, sin perjuicio de no haberse indicado en lo absoluto de qué forma se materializa esa afectación,



no divisa esta Corte cómo podría ésta producirse, en tanto únicamente se dispone la entrega de los número RUC y RIT de las acciones judiciales interpuestas por el INDH en el periodo comprendido entre el 18 y 28 de octubre de 2019, respecto de hechos que no han sido calificados como homicidio.

Sin perjuicio de lo anterior, estas informaciones no constituyen tampoco datos sensibles conforme lo previsto en la letra g) del artículo 2° de la Ley N°19.628, en tanto no revela “datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”, sino únicamente información objetiva que dice relación con la singularización de procesos judiciales determinados que tuvieron como forma legal de inicio la querella deducida por el INDH. De modo alguno esa información importa revelar otras circunstancias propias de la intimidad de quienes requirieron del referido instituto el ejercicio de acciones penales por los hechos de que afirman fueron víctimas, ni precisamente tales hechos. En razón de lo anterior, no resulta aplicable el artículo 10 de la misma ley, que prohíbe el tratamiento de los datos de carácter sensible.

Quinto: Que cabe tener presente, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Agrega la norma que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

En este contexto, no obstante que con la información que se ha ordenado entregar por parte del Consejo para la Transparencia podría llegar a conocerse la identidad de las víctimas, ello no constituye un obstáculo que permita afirmar una afectación *per se* a la vida privada o a la seguridad personal, máxime si se tiene también en consideración lo previsto en los



artículos 9° del Código Orgánico de Tribunales, en el Código Procesal Penal y en la Ley N° 20.886.

Ahora bien, sin perjuicio que, como se dijo, la invocación de la causal de reserva del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 no formó parte de la oposición ante el Consejo para la Transparencia, el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes no constituye una ley de quórum calificado que consagre la reserva de la información requerida, sino que únicamente dispone que toda persona sometida a tortura tiene derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, agregando que deben tomarse las medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. Como puede advertirse y lo advirtió la parte reclamada al evacuar el traslado conferido, la norma internacional sólo contempla una obligación de resguardo del denunciante o de la víctima y de los testigos, pero no precisamente que el número de RIT o RUC de una querella criminal o el tribunal sea un dato reservado o secreto.

A mayor abundamiento, en relación a esta causal de reserva, vinculada al artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, cuando es invocada respecto de normas legales que son anteriores a la reforma constitucional de 2005, introducida en virtud de la Ley N° 20.050, la jurisprudencia ha concluido que para la configuración de la hipótesis respecto de una norma que establece secreto o reserva no basta con que ésta tenga rango legal para que se entienda por este solo hecho que posee la condición de ley de quórum calificado, sino que, además, debe ella establecer con determinación y especificidad la reserva y esta última debe fundarse o estar acreditada en la afectación de alguno de los motivos constitucionales de secreto que además consagra el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, todo lo cual no acontece en el caso de la especie.

Sexto: Que por las razones expuestas y concluyendo que el Consejo para la Transparencia no ha excedido el marco de sus atribuciones legales al ponderar la afectación que la divulgación de la información requerida pudiese eventualmente generar ni tampoco al disponer en definitiva su entrega, pues



en tanto órgano dotado de la potestad de dirimir una controversia de naturaleza jurídica evidentemente se halla llamado a desentrañar el verdadero sentido y alcance de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que le toca resolver, no cabe sino concluir que la reclamación deducida debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, se **rechaza** el reclamo deducido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de la sentencia del Consejo Para la Transparencia recaída en el amparo Rol N° 8223-2019.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N°Contencioso Administrativo-247-2020.



Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

